

Antofagasta, a dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve.

**VISTOS:**

Ante la Segunda Sala integrada por el Ministro Titular Sr. Dinko Franulic Cetinic y el Abogado Integrante Sr. Fernando Orellana Torres, se llevó a efecto la segunda audiencia para conocer el recurso de nulidad, Ingreso Corte 380-2018, medio de impugnación deducido por el abogado don Gabriel Arriaza Moena, en representación de la parte denunciante, en contra de la sentencia dictada con fecha trece de noviembre del año dos mil dieciocho, por el Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta, en causa RIT T-253-2018, que acogió la denuncia de tutela laboral de Cristian González Araos, en contra del Instituto Nacional de la Juventud.

Comparecieron en estrados los abogados de las partes quedando sus alegaciones registradas en el sistema de audio.

Se puso término a la audiencia, quedando la causa en estudio.

Tomado el acuerdo se dicta la presente sentencia.

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que la parte demandada dedujo recurso de nulidad invocando diversas causales de nulidad. Las causales señaladas en su recurso corresponden a las causales de invalidación del artículo 478 letra a), 478 letra b) y 477 todos del Código del Trabajo las que se ejercen contra la sentencia definitiva de autos.

**SEGUNDO:** Que respecto a la primera causal, la de la letra a) del artículo 478 del Código del Trabajo, esto es,



cuando la sentencia haya sido pronunciada por juez incompetente, en conformidad el artículo 1° del Estatuto Administrativo en relación con el artículo 1°, 420 y 485 del Código del Trabajo, expresa el que la sentencia definitiva que se recurre ha sido pronunciada por juez incompetente. Precisa que el artículo 485 del Código del Trabajo prescribe que el procedimiento de tutela laboral se aplicará respecto de las cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de las normas laborales que afecten los derechos fundamentales de los trabajadores, entendiéndose por tales aquellos establecidos en la Constitución Política de la República y que el propio artículo antes citado se encarga de desarrollar. También se aplicará el referido procedimiento para conocer de actos discriminatorios establecidos en el artículo del Código del Trabajo. Profundiza el legislador señalando: "Se entenderá que los derechos y garantías a que se refieren los incisos anteriores resultan lesionados cuando el ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al empleador limita el pleno ejercicio de aquellas sin justificación suficiente, en forma arbitraria o desproporcionada, o sin respeto a su contenido esencial." Categóricamente debe afirmarse a juicio de la recurrente que en este caso no se cumple ninguno de los requisitos establecidos por el legislador para la aplicación de este procedimiento. Es un hecho no discutido que el demandante se desempeñaba para la demandada, uno como funcionario "a contrata" reglado en los artículos 3 y 10 de la Ley 18.834. Por otro lado, el artículo 1° de la Ley 18.834 en relación con el artículo 1° del Código del Trabajo, permiten concluir, sin asomo de duda alguno, que el Código del Trabajo no resulta aplicable a los funcionarios de la Administración del Estado. En consecuencia, no podrá aplicarse este



procedimiento en tanto -de acuerdo con la argumentación anterior- no existen "cuestiones suscitadas en una relación laboral por aplicación de normas laborales", dado que el Código del Trabajo resulta enteramente inaplicable en el caso de autos. El fallo, con la conclusión a la que arriba en su considerando séptimo, el que reconoce que la relación que unió al funcionario con el INJUV, es un vínculo estatutario, es decir legal y de derecho público para el caso de las contratas, y esto es fundamental al distinguir la relación que existe entre el trabajador y empleador regulado por el Código del Trabajo, y aquella a la que se somete el empleado público, violentándose los arts. 1°, 3° y 10 de la Ley 18.834, en los que especialmente se definen el cargo a contrata y el empleo público, el que no es homologable al empleo regulado por el Código del Trabajo, en que expresamente se puntualizan los conceptos de "empleador" y "trabajador" de un modo que no se concilia con las definiciones del art.3° del Estatuto Administrativo.

Indica que es dable recalcar que es el propio Código del Trabajo el que, en el inciso 2° del artículo 1°, señala que sus normas no se aplicarán a los funcionarios de la Administración del Estado, centralizada o descentralizada, cuando estos se encuentran sometidos por ley a un estatuto especial, salvo en aquellos aspectos o materias no regulados por éste, lo que a su juicio no sucede en el caso de autos; y por su parte, el artículo 1 del Estatuto Administrativo señala que las relaciones entre el Estado y el personal de los Ministerios, Intendencias, Gobernaciones y de los servicios públicos centralizados y descentralizados creados para el cumplimiento de las funciones administrativas, se regularán por sus normas, con las excepciones que establece



el inciso segundo del artículo 21 de la ley N° 18.575, cuyo no es el caso.

Finalmente respecto a esta causal expresa que el procedimiento de tutela de las garantías fundamentales de los trabajadores no es aplicable al demandante, ya que al tenor de la ley, este procedimiento sólo se aplica a los trabajadores contratados en virtud de un contrato de trabajo, cuyo no es el caso de los funcionarios del Estado; y la exclusión de los funcionarios públicos del procedimiento de tutela no constituye una discriminación en la esfera de la protección de los derechos fundamentales, por la simple razón que ellos se encuentran resguardados a través de la normativa especial señalada en su propio Estatuto.

**TERCERO:** Que el recurso de nulidad laboral ha sido concebido para invalidar el procedimiento total o parcialmente junto con la sentencia definitiva, o sólo esta última, según corresponda, si en su pronunciamiento concurre alguna de las causales señaladas en la ley, respecto de determinados vicios, capaces de generar nulidad y que tengan sustancial influencia en lo dispositivo del fallo.

**CUARTO:** Que los vicios susceptibles de enmienda por tan excepcional vía, que permiten anular la sentencia, se enumeran taxativamente en los artículos 477 y 478 del Código del Trabajo; ellos dicen esencial relación con la infracción de derechos y garantías constitucionales o legales, y no con la determinación que de los hechos acreditados hace el juzgador en el fallo, porque tal decisión compete en forma privativa al Tribunal que conoce del proceso, bajo sanción de vulnerar los principios básicos del juicio oral con relación al de inmediación; éste impide apreciar la prueba a otros jueces que no sean los que han concurrido e integrado el respectivo Tribunal, de modo que compete a la Corte de



Apelaciones únicamente la verificación de ciertos vicios descritos en la ley, que tengan influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, y cuya trascendencia habilita anular el mismo o el procedimiento que le precedió.

**QUINTO:** Que para una apropiada solución de la controversia expuesta por el recurrente en su causal de origen, y antes de referirse a las demás causales alegadas, se hace necesario dilucidar si los juzgados del trabajo son competentes para aplicar la tutela de los derechos laborales fundamentales a funcionarios públicos o si, por el contrario, esta conclusión carece de asidero en las disposiciones que gobiernan la materia, de acuerdo a los artículos 1 inciso tercero y 485 del Código del Trabajo.

**SEXTO:** Que se ha tenido a la vista la decisión del Tribunal Constitucional de fecha diecisiete de octubre del presente año que incide expresamente en esta causa, y que acogió el requerimiento de inaplicabilidad respecto de los artículos 1 inciso tercero y 485 ambos del Código del Trabajo, por ser contrarios a la Constitución Política de la República.

**SÉPTIMO:** Que necesariamente para la competencia se debe recurrir a las normas del Código Orgánico de Tribunales, especialmente aquella norma jurídica que define y establece los límites de qué debe entenderse por competencia, artículo 108 del cuerpo legal citado: *"La competencia es la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de los negocios que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones"*, por lo tanto la incompetencia lo es en razón de la materia, del fuero o de la cuantía -competencia absoluta-, o del territorio tratándose -competencia relativa, en su caso.



En la especie, se discute una incompetencia absoluta por referirse a un asunto que en principio se ha sustraído de las materias de las que el juez o tribunal laboral está llamado a resolver en conformidad con lo dispuesto en el artículo 420 del Código del ramo, norma que precisa los negocios que *la ley ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones* a los juzgados de letras del trabajo.

**OCTAVO:** Que para dilucidar el litigio planteado, se hace necesario tener en consideración la norma contenida en el artículo 1° del Código del Trabajo, que prescribe en su inciso primero: "Las relaciones laborales entre los empleadores y los trabajadores se regularán por este Código y por sus leyes complementarias.". En su inciso segundo agrega: "Estas normas no se aplicarán, sin embargo, a los funcionarios de la Administración del Estado, centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, ni a los trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o de aquellas en que éste tenga aportes, participación o representación, siempre que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial.". En su inciso tercero, que es justamente la norma declarada inaplicable para el presente caso, dispone: "Con todo, los trabajadores de las entidades señaladas en el inciso precedente se sujetarán a las normas de este Código en los aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias a estos últimos.". Finalmente, en su inciso cuarto prescribe: "Los trabajadores que presenten servicios en los oficios de notariás, archiveros o conservadores, se regirán por las normas de este Código."



Además de lo anterior, corresponde considerar lo dispuesto en el artículo 1° del Estatuto Administrativo, esto es: "Las relaciones entre el Estado y el personal de los Ministerios, Intendencias, Gobernaciones y de los servicios públicos centralizados y descentralizados creados para el cumplimiento de la función administrativa, se regularán por las normas del presente Estatuto Administrativo, con las excepciones que establece el inciso segundo del artículo 18 de la ley N° 18.575.", como también lo establecido en su artículo 3°, que señala: "Para los efectos de este Estatuto el significado legal de los términos que a continuación se indican será el siguiente:... c) Empleo a contrata: Es aquel de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución"; y, por último, lo dispuesto en el artículo 10, que prescribe: "Los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos".

**NOVENO:** Que de las disposiciones transcritas en los considerandos anteriores, resulta que el demandante de autos en contra del Instituto Nacional de la Juventud, se hallaba especialmente sometido al Estatuto Administrativo y, en forma supletoria, a las normas del Código del Trabajo, pero sólo en los asuntos no regulados por dicho Estatuto y en la medida en que las normas del Código Laboral no fueran contrarias a las de esa normativa especial.

**DÉCIMO:** Que, como lo ha resuelto la Excelentísima Corte Suprema, en causa Rol N° 3.321-2012, "de esas mismas disposiciones y de las restantes normas de la Ley N° 18.834, aparece que el Estatuto Administrativo establece su propia regulación en torno a las calidades funcionarias que pueden



formar parte de una dotación institucional y en cuanto a las causales de expiración en los cargos de contratados; y sus disposiciones rigen con preferencia a quienes integran una dotación como la de que se trata -contrata-, excluyendo el imperio del derecho laboral común en esos asuntos, al tenor de lo preceptuado en el mismo Estatuto Administrativo como en el Código del Trabajo, sin perjuicio de considerarse además el artículo 13 del Código Civil... y por otra parte, el artículo 485 del Código del Trabajo, establece que este procedimiento -de tutela laboral- se aplicará respecto de las cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de las normas laborales que afecten los derechos fundamentales de los trabajadores que allí se precisan; es decir, a la vinculación surgida en los términos de los artículos 7° y 8° del mismo texto legal y, en caso alguno, a la relación estatutaria a la que se someten los funcionarios públicos a contrata, cuyo contenido está dado por las disposiciones de su propio estatuto, esto es, la Ley N° 18.834".

**UNDÉCIMO:** Que de acuerdo a lo razonado y teniendo especialmente presente la declaración de inaplicabilidad del Tribunal Constitucional, que acogió el requerimiento de inaplicabilidad respecto del artículo 1 inciso tercero del Código del Trabajo que reza "Con todo, los trabajadores de las entidades señaladas en el inciso precedente se sujetarán a las normas de este Código en los aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias a estos últimos", lo que supone reenviar el asunto discutido en estos autos al inciso segundo del artículo 1, norma prohibitiva del código laboral, y que expresamente dice, en su parte pertinente, que las normas del Código del Trabajo *no se aplicarán, sin embargo, a los*





*funcionarios de la Administración del Estado, centralizada y descentralizada, impide que el Juzgado de Letras del Trabajo pueda conocer de los conflictos de tutela laboral de un funcionario "a contrata", regido por normas de la Administración del Estado*

**DUODÉCIMO:** Que, por consiguiente, el Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta es incompetente absolutamente, en razón de la materia, para conocer de la demanda de tutela de derechos laborales fundamentales interpuesta en estos autos, por lo que deberá acogerse el recurso de nulidad, siendo innecesario referirse a las demás causales alegadas por el recurrente.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y lo prevenido en los artículos 474 y siguientes del Código del Trabajo, **SE ACOGE, sin costas,** el recurso de nulidad deducido por el abogado don Gabriel Arriaza Moena, en representación de la parte denunciada, en contra de la sentencia dictada con fecha trece de noviembre del año dos mil dieciocho, por el Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta, en causa RIT T-253-2018, que acogió la denuncia de tutela laboral, y se reemplaza, por la que se dicta a continuación.

Regístrese y comuníquese.

**Ro1 380-2018 (RPL)**

Redacción del Abogado Integrante Sr. Fernando Orellana Torres.

No firma el Ministro Sr. Manuel Díaz Muñoz por haber cesado en sus funciones.



Dinko Antonio Franulic Cetinic  
MINISTRO(P)  
Fecha: 18/12/2019 16:37:20

Fernando Andres Orellana Torres  
Abogado  
Fecha: 18/12/2019 16:36:12



Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Antofagasta integrada por Ministro Presidente Dinko Franulic C. y Abogado Integrante Fernando Orellana T. Antofagasta, dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve.

En Antofagasta, a dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.  
A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>

## **SENTENCIA DE REEMPLAZO**

Antofagasta, a dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 478 inciso segundo del Código del Trabajo, se procede a dictar el siguiente fallo de reemplazo:

### **VISTOS:**

De la sentencia impugnada se eliminan los considerandos quinto y siguientes y su parte resolutive.

### **Y TENIENDO ADEMÁS PRESENTE:**

**PRIMERO:** Los fundamentos del fallo de nulidad que se tienen expresamente por reproducidos.

**SEGUNDO:** Que la declaración de inaplicabilidad del Tribunal Constitucional, acogió el requerimiento de inaplicabilidad respecto del artículo 1 inciso tercero del Código del Trabajo que reza "Con todo, los trabajadores de las entidades señaladas en el inciso precedente se sujetarán a las normas de este Código en los aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias a estos últimos", lo que supone reenviar el asunto discutido en estos autos al inciso segundo del artículo 1, norma prohibitiva del código laboral, y que expresamente dice, en su parte pertinente, que las normas del Código del Trabajo *no se aplicarán, sin embargo, a los funcionarios de la Administración del Estado, centralizada y descentralizada*, impide que el Juzgado de Letras del Trabajo pueda conocer de los conflictos de tutela laboral de un funcionario "a contrata", regido por normas de la Administración del Estado.



**TERCERO:** Que, por consiguiente, el Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta es incompetente absolutamente, en razón de la materia, para conocer de la demanda de tutela de derechos laborales fundamentales interpuesta en estos autos.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 1 y 459 del Código del Trabajo, se declara que:

1.- Que **SE ACOGE** la excepción de Incompetencia Absoluta del Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta para conocer la Acción de Tutela interpuesta en contra del Instituto Nacional de la Juventud.

2.- Que cada parte **pagará sus costas.**

Regístrese y comuníquese.

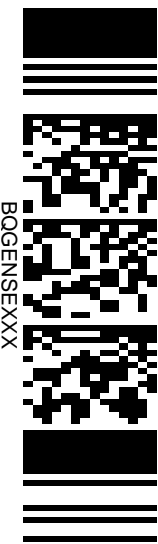
**Ro1 380-2018 (RPL)**

Redacción del Abogado Integrante Sr. Fernando Orellana Torres.

No firma el Ministro Sr. Manuel Díaz Muñoz por haber cesado en sus funciones.

Dinko Antonio Franulic Cetinic  
MINISTRO(P)  
Fecha: 18/12/2019 16:37:23

Fernando Andres Orellana Torres  
Abogado  
Fecha: 18/12/2019 16:36:14



Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Antofagasta integrada por Ministro Presidente Dinko Franulic C. y Abogado Integrante Fernando Orellana T. Antofagasta, dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve.

En Antofagasta, a dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.

A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>